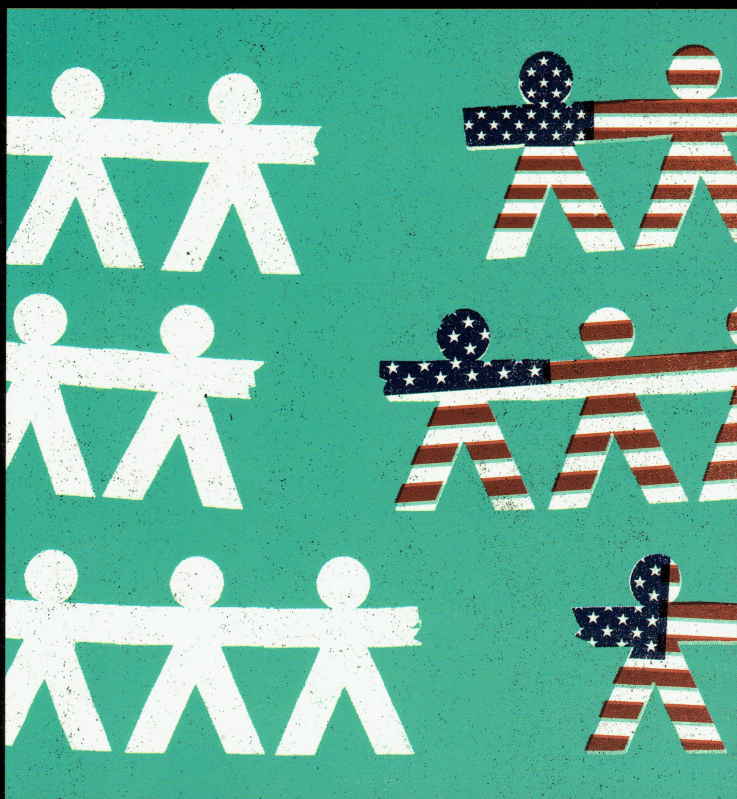


JUAN PABLO VILLALOBOS

Yo tuve un sueño

El viaje de los niños
centroamericanos a Estados Unidos



● crónicas ●
ANAGRAMA

Juan Pablo Villalobos

Yo tuve un sueño

El viaje de los niños
centroamericanos a Estados Unidos

Epílogo y notas de Alberto Arce



EDITORIAL ANAGRAMA
BARCELONA

Este libro se realizó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2016-2019

Ilustración: © Cinta Fosch

Primera edición mexicana: septiembre 2018

Diseño de la colección: Julio Vivas y Estudio A

© Del mapa, Germán Andino, 2018

© Del epílogo, Alberto Arce, 2018

© Juan Pablo Villalobos, 2018

© EDITORIAL ANAGRAMA, S. A., 2018

Pedró de la Creu, 58

08034 Barcelona

D. R. por la presente coedición, 2018

Editorial Océano de México, S.A. de C.V.

info@oceano.com.mx

ISBN: 978-607-527-724-0

Impreso en México

Impregráfica Digital, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1425 - 20,
Col. Insurgentes Mixcoac, 03920, Benito Juárez, Ciudad de México



EPÍLOGO: MIEDO. HUIDA. REFUGIADOS

Un mañana de verano de 2014, a pocos kilómetros de la estación de Arriaga en Chiapas, al sur de México, la Bestia, el tren que ha transportado decenas de miles de centroamericanos rumbo a la frontera de Estados Unidos, había descarrilado de nuevo. Aquella vez, al menos, sin lamentar daños personales. Mientras se reparaba el desaguisado, de entre los cientos de personas que esperaban impacientes para seguir camino, Gladys Chinoy, una niña guatemalteca de catorce años, tímida y educada, de gesto afable y maneras suaves, me pidió el teléfono para contactar con su madre, que esperaba esa llamada asustada en una cocina de Nueva York, y decirle que, pese a todo, estaba bien.

Después, me contó lo que cientos de menores han contado una y otra vez desde entonces a

quienes les han preguntado. Que viajaba por una mezcla de motivos. Que huía de la violencia y la pobreza de Guatemala, en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos. Que su madre, que llevaba años trabajando en el norte, la esperaba en Nueva York.

Fuera de la física, pocas cosas suceden por un solo motivo. A veces, ni en la física. El caso de Gladys no tenía por qué ser diferente. Gladys como una consecuencia del fracaso de Centroamérica. Gladys es una de entre los 189.000 menores centroamericanos que Estados Unidos cuenta como menores no acompañados que han llegado al país en los últimos cinco años. Para reunirse con un familiar. Porque huyen de la violencia rampante sea esta callejera, sexual o doméstica. De la extorsión y la corrupción que todo lo ahogan e impiden salir de la pobreza, de la falta de oportunidades de estudio y trabajo. En definitiva, de la catástrofe de sus países. Que es tanto como decir que huyen porque buscan una vida mejor.

Gladys tuvo suerte. Sé que llegó. Me envió un mensaje y se llamó a silencio. A su nueva vida.

La letra de la ley dice que los menores no acompañados que atraviesan sin permiso la frontera no pueden quedarse legalmente en el país. Estaban, en su búsqueda de una vida mejor, pro-

vocando una crisis migratoria, de papeles y residencia. La crisis de los que viven pero no son ciudadanos de pleno derecho. Decenas de miles de niños y niñas estaban a punto de convertirse de una u otra forma en *ilegales*, en futuros *ilegales*, en algún tipo de *ilegales* o de personas amenazadas con la *ilegalidad*. Esa categoría-hoy, ese *no-lugar* que absorbe, tensa, condiciona, atemoriza a los ya atemorizados, limita, culpabiliza, complica, esconde, silencia, humilla, hiere a millones de personas en Estados Unidos y responde a un sistema para el que no todas las personas que residen en un lugar determinado tienen los mismos derechos. La categoría de los que limpian, trabajan, estudian y son, como nosotros, a veces felices, a veces infelices, entre y con nosotros pero sin ser reconocidos como ciudadanos dignos de los mismos derechos que aquellos que tenemos algo tan simple como un papel diferente. ¿Son refugiados? ¿Son migrantes? Narrativas con consecuencias. Serán lo que podamos y decidamos contar.

Para la mayor parte de ellos ese lugar y tiempo de presencia en Estados Unidos es un *no-lugar*. El limbo de un sistema judicial colapsado que, en algún futuro, llevará a la emisión de documentos de residencia legal —muchas veces, solo tras conseguir que se reconozca que son refugia-

dos— o a una orden de deportación. Una expulsión que nadie aplicará a menos que caigan en una redada o cometan un delito o alguien los denuncie y la ley los condene. Que además, y en función de los casos, siga con que, una vez superada la mayoría de edad, su expediente caiga dentro de la cuota de personas que un año determinado Estados Unidos decide deportar de entre los millones de personas que ha mantenido bajo el yugo y la amenaza de esa deportación que ocurre tras perder o no presentarse ante sus causas judiciales. Un *no-lugar* que dura, para muchos, largos años.

Para ellos, que huyen de América Central, esa situación, ese *no-lugar*, es suficiente. La supuesta crisis migratoria que provocan en la narrativa de quienes los reciben es la esperanza de una vida mejor que la que tendrían de quedarse viviendo en la crisis de la que huyen. Es difícil que uno se equivoque sobre aquello que tanto le concierne, aquello por lo que está dispuesto a jugárselo todo. Que atravesando México sin papeles es jugarse hasta la vida.

Según datos para 2017 de la Oficina de Reubicación de Refugiados de los Estados Unidos, el 90 % de los menores no acompañados son enviados con familiares en Estados Unidos tras un período medio de 41 días en detención. El 96 % de

todos los niños transferidos de las autoridades fronterizas a la Oficina de Reubicación de Refugiados de los Estados Unidos son centroamericanos. No han cometido delito. Pero son detenidos, Piden refugio y reunificación familiar. Son liberados con un papel en la mano. Una citación para que la justicia decida sobre su estatus. El que les situará, durante varios años, en ese *no-lugar* al borde de la ilegalidad.

Gladys utilizaba la palabra huida. Que quiere decir miedo. El miedo nace de una amenaza que se siente real. El miedo, nazca de donde nazca, es real. El miedo existe. Tuvieron miedo. Por eso huyeron. Salieron del Triángulo Norte de América Central. Los países de los que huyeron, Guatemala, Honduras, El Salvador, sufren una crisis estructural de miedo y falta de oportunidades. Muestran, como carta de presentación, las mayores tasas de homicidio del mundo en el que se registran los homicidios. Incluso más que algunos que viven en guerra abierta. Honduras y El Salvador, seguidos a poca distancia de Guatemala, países que nadie considera en guerra, registran índices de homicidios de entre 40 y 91 por cada 100.000 habitantes. Hay ciudades como San Pedro Sula, en Honduras, donde la cifra ha llegado a subir a más de 100. San Salvador ha llegado a 97 homicidios por cada 100.000 habitantes. En

San Pedro Sula o San Salvador han llegado a morir más personas asesinadas en un año que en Kabul o Bagdad. No mueren 50 personas en la explosión de un coche bomba. Pero mueren 50 personas asesinadas en tres o cuatro días. En un solo fin de semana. Una a una o de cinco en cinco. Según la Organización Mundial de la Salud las cifras de las principales ciudades centroamericanas multiplican hasta por diez lo que en salud pública se denomina epidemia. El índice español es de 0,47 por cada 100.000 habitantes.

En América Central hay feminicidio. Ese homicidio contra una mujer por el hecho de serlo que suele ir acompañado de violencia sexual extrema e indescriptible. Un miembro de una pandilla señala a una niña como posesión deseada y a esa niña le quedan dos opciones: la violación grupal con tortura y seguida de muerte segura o la huida. Hay desaparecidos y desaparecidas. Por una miríada de motivos. Sin cadáver no hay delito. El Salvador y Honduras son inmensas fosas comunes. Guatemala también. Esas fosas rebosan desde sus guerras civiles de los setenta y los ochenta. Nadie sabe cuántas. Cada día emerge una nueva. Hay miles.

El primer informe que trataba de explicar el porqué de esa huida masiva de América Central, publicado en 2014, cuando comenzó a hablarse

de que la cifra de menores no acompañados que llegaba a los Estados Unidos estaba triplicándose, lo firmaba el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. No era casual que fuera esa institución y no otra. Llevaban años siguiendo el problema real, el que responde a la pregunta de fondo sobre el concepto de refugio. Un problema que solo acaparó portadas cuando llamó a las puertas, las fronteras, del mundo que sí importa. Del nuestro, el que marca la agenda y las narrativas. Los expertos de ACNUR habían realizado 404 entrevistas a una muestra representativa de estos menores. Sus conclusiones fueron claras. El 58 % de los niños entrevistados habían sido desplazados por la violencia y cumplían los requisitos para ser reconocidos como refugiados. En el caso del El Salvador, esa cifra aumentaba hasta el 72 % de los entrevistados. El 21 % de los niños hablaba de violencia intrafamiliar. Ningún motivo excluye a los demás. La media de niños que señalaba realizar viaje por motivos de reunificación familiar, cruzada con las demás cifras, asciende al 38 %. Nada sucede por un solo motivo. ¿Son refugiados? Puede que sí y no solo. Y eso deja la toma de decisiones al albur de las narrativas y las decisiones políticas.

El barómetro de las Américas realizado cada año por la Universidad Vanderbilt descubrió que,

en 2017, más de la mitad de los habitantes del Triángulo Norte tenía miedo a morir asesinado y no usaba el transporte público por temor. El transporte público es uno de los lugares más peligrosos, allí donde tienen lugar gran parte de los asesinatos. Algunas cifras son aún peores. Muestran más miedo. El mismo informe señala que el 70 % de los padres prohíben a sus hijos jugar en la calle. Que el 60 % de los adultos evita salir solo a la calle. Que en torno a la mitad evita comprar determinados productos por miedo a la violencia que atraen. Que casi el 40 % de los habitantes de Honduras y El Salvador ha considerado abandonar el país por miedo a morir. Y que esa cifra se ha multiplicado por cuatro desde que se preguntó por ella por primera vez en 2010.

En El Salvador, en 2014, por lo menos 135.000 personas, el 2,1 % de la población, habían sido forzadas a abandonar sus hogares, la gran mayoría por las extorsiones de las pandillas y la violencia, según cifras de la ONU. Esa cifra equivale a más del doble del porcentaje de desplazados por la brutal guerra civil de Colombia.

En Honduras, la Relatoría Especial de los Derechos Humanos de Naciones Unidas cifraba el número de personas desplazadas por la violencia, también debido a la violencia generada por las pandillas, en al menos 170.000 personas, al

tiempo que reconocía que la cifra podía ser mucho mayor debido a la falta de registros fiables.

Y ese miedo, esa violencia, ese desplazamiento, esa impotencia, se instala en un contexto de desconfianza hacia las autoridades de sus países, aquellos que tienen el deber de protegerlos. El mismo barómetro de la Universidad Vanderbilt señala que el 12 % de los habitantes de la región ha tenido que pagar *mordidas* a la policía el año anterior a que el estudio les preguntase. Que la mitad de la población no tiene ninguna confianza en sus instituciones. Ni en el gobierno, ni en la policía, ni en la administración local, ni en los políticos. Peor aún, mucho peor, el 68 % declara no tener confianza interpersonal en sus vecinos. Esas son las cifras del miedo. Aderezadas con las de la impunidad. En 2015, el entonces fiscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí, explicó en su rendición de cuentas ante el Congreso que el 91 % de los homicidios denunciados en el país nunca llegaba a juicio. La justicia no está ni se la espera.

El miedo no actúa solo. Tiene aliados. Huyeron, junto al miedo, por falta de oportunidades. La situación económica de la región es desastrosa. Con ella, todos los indicadores relacionados. En Guatemala, entre el 46 % y el 55 % de los menores de cinco años, según el año, sufre desnutri-

ción crónica. Mala alimentación y hambre. Si se observa solo la cifra en la población rural, indígena, la desnutrición aumenta al 80 % de los niños. Huyen, también, del hambre. En Honduras, la cifra de desnutrición infantil crónica es mejor que en Guatemala, «solo» el 25 % de los menores de cinco está desnutrido. Pero el sistema educativo está quebrado. En 2013 solo el 5 % de las escuelas habían ofrecido las horas lectivas necesarias para completar un curso debido a huelgas de maestros que dejan de ir a trabajar porque no reciben sus salarios en un país quebrado. El 31 % de los menores de dieciséis años ya ha dejado de estudiar y trabaja. En el campo, esa cifra aumenta hasta el 68 %. Más del 60 % de la población vive en la pobreza. Solo uno de cada cuatro niños termina la secundaria. Solo el 7 % de la población llega a la universidad. En El Salvador, la economía está tan quebrada y relacionada con la emigración a Estados Unidos que el 16 % de todo el ingreso nacional bruto corresponde a las remesas familiares que los migrantes envían a casa cada mes. Este círculo de dependencia destructiva está enraizado en la estructura mental, económica y de seguridad de América Central tanto como lo están los millones de centroamericanos que viven en Estados Unidos o los millones de dólares en ayuda policial y militar a gobiernos incapaces que

la administración de Estados Unidos envía cada año desde hace décadas para que todo siga igual.

Huyeron de todo eso, y, según gran parte de los expertos —al menos de los que siguen el derecho internacional—, cuando se impone el miedo y el fracaso del Estado impide que éste cumpla con su deber de proteger, quienes huyen son refugiados. Lo son se reconozca o no su condición de refugiados. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, entre 2010 y 2015 el incremento del número de solicitudes de asilo presentadas en todo el mundo, que es decir en Estados Unidos y México, por personas de El Salvador, Honduras y Guatemala ha sido del 1.487%. Y la cifra no cesa de aumentar. En 2017, el secretario general de Amnistía Internacional, Shalil Shetty, me dijo durante una entrevista que no le cabía duda de que nos encontrábamos ante una crisis de refugiados: «Que no huyan de la guerra no significa que no huyan de condiciones similares a las de la guerra.»

¿Dónde está la crisis entonces? ¿En el lugar que recibe o en el que expulsa? ¿En las decisiones de quienes la nombran en sus relatos y la sitúan de un lado u otro de esta o aquella frontera?

En el centro de toda esa violencia, del fracaso del Estado, que solo avanza en sus políticas de seguridad, y que si avanza es solo por el lado del

gasto, que no de los resultados, están las pandillas. Un producto de transformación y exportación estadounidense hacia América Central.

Honduras, Guatemala y El Salvador exportaron refugiados hacia el norte. Desde los años sesenta, el flujo de jóvenes que huía de una región en guerra era constante. La guerrilla se levantaba contra gobiernos y ejércitos apoyados por los Estados Unidos en su lucha global contra la expansión del marxismo. Quien no quería luchar, se iba. Muchos huían de una guerra para llegar a otra, la que ya peleaban en Los Ángeles las pandillas callejeras. En Estados Unidos algunos miles de esos jóvenes y sus descendientes que huían buscaron identidad y protección en las pandillas. Se formaron en la escuela del crimen. Solo para ser devueltos a sus países de origen a exportar lo que habían aprendido en Estados Unidos.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) nacieron en Estados Unidos, no en América Central. Desde los años setenta del siglo pasado, los migrantes centroamericanos en Estados Unidos, sobre todo en California, comenzaron a agruparse de manera informal para protegerse de la violencia generada por las pandillas mexicanas y negras. Para generar violencia ellas mismas. Creando sus propias pandillas. Esas pandillas, la 13 y la 18, perfeccionadas en las calles y

cárceles de Los Ángeles, llegaron a convertirse en un problema de seguridad pública. Fue en los años noventa, durante la administración de Bill Clinton, que alguien tuvo la idea de deportar a esos criminales a lugares que no estaban preparados para asimilarlos de vuelta. A sociedades débiles y frágiles que salían de sus propias guerras civiles, que tampoco sabían combatirlos y en las que sobraban las armas y los excombatientes. Comenzaron a llegar a Tegucigalpa, San Salvador y Guatemala unos jóvenes solos, sin familia ni, muchas veces, vínculos sociales con los países que habían abandonado cuando niños. Que hablaban inglés. Estaban conectados. Traían rutinas, necesidades, experiencia en el crimen. Nadie les ofreció alternativas. Instituyeron gradualmente el miedo, que se extendió allí donde nadie más gobernaba. Por ejemplo, en los albergues de niños huérfanos con los que nadie sabía ni quería hacer nada tras el devastador huracán Mitch en la Honduras de 1998 y 1999. Las pandillas se convirtieron en familia, barrio, organización, identidad. Y se extendieron cual metástasis hasta provocar el fallo generalizado de las sociedades en las que se enquistaron.

Hace décadas que las calles centroamericanas no son de sus habitantes civiles, de sus policías o de sus ejércitos. Por mucho que las patrullen con

vehículos y armas de guerra. Son de grupos de adolescentes, de pandillas, que controlan los barrios cuadra a cuadra, calle a calle, esquina a esquina, frontera invisible a frontera visible, voluntad a voluntad, vida a vida, cual organizaciones totalitarias, criminales, extremadamente violentas. Hay masacres. Hay asesinatos de hombres jóvenes por reclutamiento forzoso para esas mismas pandillas y enfrentamiento entre las pandillas callejeras y de las pandillas contra la policía y el ejército. Hay escuadrones policiales de limpieza social. Hay tráfico de drogas, peleas por los inmensos beneficios que dejan las rutas por las que discurren las drogas de nuestros ocios que, ilegales, llegan a un precio tan alto que merece la violencia que les genera a ellos. A los centroamericanos. Hay homicidios relacionados con los pagos de extorsiones exigidas por las pandillas, otra epidemia generalizada y que afecta a casi cada comerciante, desde el taxi hasta la pequeña tienda de alimentación, pasando por los vendedores callejeros o las distribuidoras multinacionales de refrescos. A la pandilla hay que pagarle renta, a veces, hasta por vivir en tu propia casa si no quieres perderla. La pandilla y su violencia es un drenaje constante, por todos sabido, mil veces denunciado, explicado, reportado, violento, opresivo y extenuante de todas las posibilidades de vida y trabajo.

En América Central, Estados débiles, extenuados, fallidos, corruptos, el ciudadano es un recurso del que extraer, lo haga una pandilla, lo haga la policía, el ejército o la política, a través de la mejor optimización posible del crimen, para quedarse con todo aquello que pueda tener algún valor. Su dinero, su información, su trabajo extenuado, la posibilidad de elegir un modelo de zapatillas o un tinte de pelo, sexualidad o voto se convierte en el beneficio de unos pocos. En último extremo, se lleva la vida de quien no se deje. De quien no resulte funcional a un modelo basado en el extractivismo de todo por todos los que pueden extraer contra todos los que no pueden defenderse. Basado en el vaciamiento por un puñado de dólares, quetzales o lempiras de toda identidad, posibilidad, esperanza de aquellos que no quieren o no pueden usar la violencia para defenderse.

La pandilla es un actor no estatal que ejerce su poder controlando territorio. Son suyas las calles, los cuerpos, las mentes de sociedades marcadas por el oír, ver y callar de su control total. En países como El Salvador, Guatemala y Honduras las pandillas disponen de un amplio control territorial, de carácter cuasi totalitario, especialmente en zonas urbanas. Ese control territorial en permanente disputa es la base de su existencia porque es desde ese lugar que desarrollan sus ac-

tividades criminales, especialmente extorsión, narcomenudeo y control de la zona frente al posible ingreso de grupos rivales con los que nadie querrá compartir beneficios.

La población que vive en la zona controlada por la pandilla queda bajo control de la organización en el sentido más estricto. Para desarrollar las actividades a las que se dedica la pandilla, es vital el reclutamiento de miembros, habitualmente hombres jóvenes, muchas veces desde que son niños. Y la connivencia, ya sea voluntaria u obligada, de gran parte de los habitantes del lugar. La pandilla controla físicamente el movimiento, la entrada y salida de la zona que controla. Esas zonas varían y pueden cambiar con relativa velocidad. No existen mapas que puedan definir de manera estable las fronteras entre territorios de control. Vivir en una zona controlada por una pandilla y trabajar en una zona controlada por otra pandilla, mantener relaciones con personas de un barrio rival o acudir a un centro educativo en otra parte de la ciudad, puede conllevar una amenaza o represalia reales por parte de la pandilla. La muerte. Además, establece reglas de comportamiento para quienes viven en ella que van desde limitaciones horarias hasta reglas de conducta, pasando, en ocasiones extremas, por la apariencia física de los habitantes del

barrio, impidiendo la presencia de ciertos números, letras y colores. Es necesario señalar que, sea cierto o no, los rumores corren libres por las calles y generan impacto. Ejemplos como las reglas supuestamente impuestas que limitarían hasta el color del tinte para el cabello que las mujeres pueden utilizar o establecerían toques de queda y zonas de acceso prohibido han sido ampliamente reconocidos y documentados.

La pandilla es una organización armada formal y permanente con una estructura vertical pero que muta rápidamente de ejecutores. Siempre hay reclutas. Se incorporan jóvenes, caen presos o mueren cuando aún son jóvenes. Se agrupa en clicas, que son grupos de afinidad de tamaño variable con un líder reconocido y que se definen en función del territorio al que están adscritas. Las clicas se relacionan entre sí y se coordinan más allá de la unidad territorial más pequeña que controlan, que puede partir de varias calles de un barrio y abarcar uno o varios barrios. Una misma pandilla se relaciona y coordina entre barrios y ciudades de un mismo país, especialmente en el caso de la MS-13 o Mara Salvatrucha, aunque sin excluir a Barrio 18, con los Estados Unidos. De San Salvador a Guatemala, de Guatemala a Long Island. De Los Ángeles a Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Las pandillas, originalmente dos, ya son docenas. «Revolucionarios», «Chirizos», «El Combo de los que no se deja», los «Mao Mao», la «Raza» o el «Desorden». Agrupan a 10.000 miembros en Honduras, o a 36.000, según la fuente que se consulte. A 70.000 miembros en El Salvador. Nadie sabe a ciencia cierta. Decenas de miles y creciendo. Se pelean, mutan, se alían, se fraccionan. Negocian, matan, extorsionan, secuestran y trafican, compran votos e intervienen en política. Las pandillas son, hoy, las calles de América Central. Y al menos 190.000 menores de edad han decidido huir de ellas en los últimos cinco años rumbo a Estados Unidos. Han hecho estallar la agenda migratoria. Aquí es imposible que la historia se repita como farsa. Ya es tragedia. Está por ver si alguien asume como suya la resolución de una crisis de refugiados que permita que decenas de miles de niños centroamericanos logren cumplir su sueño de vivir mejor. De vivir.

ALBERTO ARCE